

El Informe no establece las responsabilidades de la actual crisis y equipara las violencias palestina e israelí, aunque reclama la congelación de la colonización por parte del Estado de Israel

'Informe Mitchell'

El epílogo del proceso de Oslo

Desde la irrupción de la segunda Intifada el 28 de septiembre de 2000, la comunidad internacional ha manifestado su preocupación por el deterioro de la situación de los Territorios Autónomos y ha mostrado su deseo de que israelíes y palestinos retornen a la mesa de negociaciones para reanudar el alicaído proceso de paz iniciado en Oslo en 1993. En la Cumbre de Paz de Oriente Medio de Sharm el-Sheikh, celebrada el 17 de octubre del pasado año, se alcanzó un compromiso para que una comisión internacional elaborase un informe que determinase las causas que provocaron este levantamiento popular y estableciese un marco para restablecer la confianza entre las partes y

Presentación y traducción:

Ignacio Álvarez-Ossorio

Arabista y profesor de la Universidad de Alicante

reanudar así las negociaciones sobre el estatuto final de la Autoridad Palestina (AP).

Después de varios meses de deliberaciones, la llamada Comisión Mitchell, presidida por el ex senador norteamericano George J. Mitchell, hizo público el 21 de mayo el tan esperado informe. Los cinco integrantes de esta comisión planteaban una serie de recomendaciones destinadas a poner término a la violencia, restablecer la confianza y reanudar las negociaciones. Aunque la comisión respetaba el marco de los Acuerdos de Oslo, también reconocía algunas de sus carencias, al reclamar la congelación de la colonización y el respeto de la continuidad de los territorios palestinos.

EL INFORME pretende ser ecuánime en sus críticas y en sus recomendaciones, pero advierte desde un principio "No somos un tribunal. Cumplimos con la petición de que no estableceremos el culpable o el inocente entre los individuos y las partes (...)". De esta manera el documento reparte las responsabilidades entre palestinos e israelíes y prefiere no responsabilizar a una sola parte de la crisis actual.

El informe recomienda un fin incondicional de la violencia, una inmediata congelación

de la colonización israelí (incluido "el crecimiento natural" de los asentamientos) y, además, solicita al gobierno de Israel que "debería dejar claro a la AP que una futura paz no debería representar una amenaza a la continuidad territorial del Estado palestino a establecerse sobre Cisjordania y la Franja de Gaza".

El lenguaje empleado para definir la crisis actual no es, sin embargo, imparcial. Desde sus primeros párrafos se detecta un doble lenguaje para definir las acciones de las fuerzas de ocupación y los palestinos. La

palabra 'violencia' (que aparece 36 veces) es empleada para referirse a la Intifada frente a 'levantamiento', que tan sólo es empleada en una ocasión. También se repiten una y otra vez las palabras 'seguridad' (25 veces) y 'terrorismo' (20), dos de las machaconas preocupaciones del gobierno israelí. Las tropas de ocupación israelíes son denominadas indistintamente "personal de seguridad", "fuerzas militares" o "fuerzas de seguridad". Tampoco se habla de la permanente violación de los derechos humanos más elementales de la pobla-

ción palestina, ni tampoco de la cruenta represión de las manifestaciones palestinas.

'Asentamientos'

Los 'asentamientos' (18 menciones) se convierten en alguna ocasión en "áreas pobladas israelíes" (2). Nada se dice en cambio de las resoluciones de Naciones Unidas que condenan la política de ocupación israelí ni tampoco se denuncia que los asentamientos violan el artículo 47 de la IVª Convención de Ginebra. El Informe Mitchell únicamente habla de 'ocupación' (3) cuando transmite la opinión de la parte palestina, ignorando de esta manera las resoluciones internacionales que reclaman la retirada incondicional israelí de los territorios palestinos ocupados desde 1967. Pero quizás lo más grave es el empeño por ocultar las verdaderas razones del conflicto y disfrazarlas como "diferencias religiosas" (1).

Pocos días después de su aparición, la Administración norteamericana, por medio de su secretario de Estado Colin Powell, respaldó el informe afirmando que el primer paso para su aplicación era "un inmediato e incondicional cese de la violencia". De esta manera se hacía una lectura restrictiva al incidir en la responsabilidad palestina en la irrupción de la violencia, mientras se relegaba a un segundo plano el llamamiento a la congelación de la

construcción de asentamientos por parte de Israel. Tanto el gobierno de Israel como la AP aprobaron el informe, pero mostraron discrepancias sobre cuáles serían los primeros pasos para facilitar su aplicación práctica dado que el informe carecía de un calendario para su puesta en marcha.

Despliegue de observadores

Si bien en un principio la AP consideró que suponía "una base coherente para resolver la actual crisis", pronto reclamó en los foros internacionales el despliegue de observadores internacionales en los territorios autónomos para proteger a la población civil. Esta opción fue rápidamente descartada por el gobierno Sharon ("al considerar que no responderá a las preocupaciones securitarias israelíes e interferirá en las negociaciones bilaterales") y también por la Administración Bush (que se apresuró a anunciar que vetaría cualquier resolución del Consejo de Seguridad contraria a su política tradicional en la zona). El Informe Mitchell señalaba que dicha fuerza únicamente podría desplegarse con la aprobación de las dos partes lo que en la práctica ofrecía a Israel la capacidad de vetar tal iniciativa.

El gobierno israelí dirigido por Ariel Sharon anunció por su parte que aceptaba las recomendaciones del informe "en

principio", pero protestó por el llamamiento a la congelación de los asentamientos y consideró imprescindible el fin de la Intifada como paso previo para que se reanudasen las conversaciones. Por lo tanto, la Administración Bush y el gobierno Sharon coincidían en que un alto el fuego era imprescindible para la posterior aplicación del resto de las recomendaciones del Informe. Un alto el fuego, más teórico que práctico, fue anunciado por Ariel Sharon el 22 de mayo y, diez días más tarde, por Yaser Arafat. Pese a su aceptación, la represión de la Intifada por parte del ejército israelí continuó y se inició una campaña de ejecuciones extrajudiciales contra los supuestos dirigentes de la Intifada y contra otros activistas, tanto de la tendencia islamista como la nacionalista.

En las semanas posteriores se hizo especial hincapié en la necesidad de que ambas partes realizasen los esfuerzos pertinentes para aplicar las recomendaciones recogidas en el Informe Mitchell. Ante la ausencia de avances, el director de la CIA, George Tenet, viajó a la zona con el propósito de establecer un calendario para la aplicación de Informe Mitchell y de mediar entre los aparatos de seguridad israelíes y palestinos para que reanudasen su cooperación.

El Documento Tenet¹, hecho público el 12 de junio, muestra la voluntad norteamericana de

1 Publicado, traducido al castellano, en CSCAweb: <http://www.nodo50.org/csca>

continuar interviniendo activamente en las negociaciones israelo-palestinas. En realidad esta involucración no es nueva. El Memorandum de Wye Plantation firmado en 1998 estableció como una de sus prioridades la colaboración securitaria entre las partes y la mediación de la CIA para garantizar los compromisos alcanzados en esta materia.

El Plan de la CIA

El Documento Tenet no sólo reclama el alto el fuego y el retorno a las posiciones vigentes el 28 de septiembre de 2000, sino que además exige que la AP detenga a los activistas que planeen atentados y reanude la cooperación en materia de seguridad. Al mismo tiempo, el gobierno de Israel debería liberar a los palestinos detenidos en los últimos meses que no estuvieran implicados en “acciones militares” y abstenerse de atacar las instalaciones policiales o administrativas de la AP. La negociación del Plan Tenet estuvo a punto de fracasar ante la negativa palestina a confiscar las armas ilegales y a arrestar a una treintena de activistas de los grupos Hamas y Yihad Islámica por considerar que este paso buscaba desencadenar una confrontación interpalestina.

El plan de la CIA fue aceptado de manera inmediata por el primer ministro Sharon quien se apresuró a manifestar

que el ejército israelí respondería cualquier ataque y se reafirmó en su política de ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente denominada “acciones preventivas”. También el presidente Arafat aceptó el plan aunque con ciertas reservas: no a la detención de activistas palestinos reclamada por Israel, no a la creación de zonas de seguridad entre los territorios autónomos y las posiciones israelíes, y sí al levantamiento del asedio a los territorios palestinos.

Tras varias reuniones se estableció un período de alto el fuego de una semana como condición necesaria para “levantar los cordones de seguridad internos y también la reapertura de las carreteras interiores, así como el puente Allenby, el aeropuerto y el puerto de Gaza, y los pasos fronterizos” (punto 6). Quedaba sin esclarecer cuándo se iniciaría este alto el fuego y quién sería el encargado de verificar su cumplimiento, dada las divergentes interpretaciones existentes al respecto. Por su parte, Sharon señaló que este alto el fuego de una semana daría paso a un período de “enfriamiento de la crisis” de otras seis semanas para restaurar la confianza entre las partes

Quedaba claro en todo caso el doble rasero de la Administración Bush que, por una parte, pretendía imponer a los palestinos el cumplimiento de todas recomendaciones del Informe Mitchell, mientras

que, por otra parte, se abstenía de presionar a Israel para que interrumpiese la represión de la Intifada, levantase el asedio de las ciudades, congelase definitivamente la colonización o pusiese término a las ejecuciones extrajudiciales.

Fuerza internacional

Después de la aparición del Informe Mitchell y del Documento Tenet, el debate se concentró en el envío de una fuerza internacional de observadores que verificase el cumplimiento del alto el fuego. La declaración sobre la situación en Oriente Medio de los líderes del G8 reunidos en Génova el 21 de julio incidió en la intervención de una “tercera parte observadora, aceptada por las partes [israelí y palestina], que debería servir para aplicar el Informe Mitchell”. La presencia de esta fuerza internacional debería ser previamente aceptada por israelíes y palestinos, tal y como advertía el Informe Mitchell. Nuevamente se ponía especial énfasis en la necesidad de poner término a “la violencia y el terrorismo” y a iniciar el período de “enfriamiento lo más rápido posible”, pero no se hacía referencia alguna a la congelación de la colonización o al levantamiento del asedio que padecen las áreas autónomas, con lo cual se imponían de nuevo los planteamientos israelíes y se desestimaban los palestinos. ●

‘Informe Mitchell’

6 de mayo de 2001

“Introducción

El 17 de octubre del 2000, al finalizar la Cumbre de Paz de Oriente Medio en Sharm el-Sheikh (Egipto), el presidente de Estados Unidos habló en nombre de los participantes (el gobierno de Israel, la Autoridad Palestina, los gobiernos de Egipto, Jordania, EEUU, Naciones Unidas (NUU) y la Unión Europea). Entre otras cosas, el presidente declaró que: “Estados Unidos creará con los israelíes y palestinos, y en consulta con el Secretario General de NNUU, un comité destinado a esclarecer los acontecimientos de las últimas semanas y prevenir su repetición”

El 7 de noviembre del 2000, tras las consultas con los otros participantes, el presidente nos invitó a participar en lo que ha pasado a ser conocido como el Comité de Investigación de Sharm el-Sheikh (...).

Después de nuestro primer encuentro, celebrado antes de que visitásemos la región, instamos al fin de toda forma de violencia. Nuestros encuentros y nuestras observaciones durante nuestras posteriores visitas a la región han intensificado nuestra convicción a este respecto. [La violencia] únicamente empeoró [esta convicción]. La muerte y la destrucción no traerán la paz, sino que profundizarán el odio y dificultarán la solución entre ambas partes. Hay un único medio para alcanzar la paz, la justicia y la seguridad en Oriente Medio: la negociación.

Pese a su larga historia y su proximidad cercana, algunos israelíes y palestinos no parecen entender sus mutuas preocupaciones. Algunos israelíes parecen no comprender la humillación y la frustración que los palestinos deben afrontar cada día al vivir bajo los continuos efectos de la ocupación, sostenida por la presencia de fuerzas militares israelíes y asentamientos sobre su tierra, o la voluntad de los palestinos de lograr la independencia y una verdadera autodeterminación. Algunos palestinos pare-

cen no comprender hasta qué punto el terrorismo crea temor en el pueblo israelí y socava su esperanza en la posibilidad de una coexistencia, o la determinación del gobierno de Israel a hacer todo lo necesario para proteger a su pueblo.

El miedo, el odio, la ira y la frustración han aumentado en ambos bandos. El mayor peligro es que la cultura de la paz, sembrada en la pasada década, está haciéndose añicos. En su lugar hay un creciente sentimiento de inutilidad y desesperación y un cada vez mayor recurso a la violencia.

Dos pueblos orgullosos comparten una tierra y un destino. Sus diferentes reivindicaciones y sus diferencias religiosas han conducido a un conflicto demoleedor, desmoralizante y deshumanizado. Ellos pueden continuar el conflicto o pueden negociar para encontrar un medio para vivir juntos en paz.

Se han conseguido muchas cosas. Se arriesgan otras muchas. En el caso de que las partes tengan éxito y completen su camino hacia un destino común, en el caso de que acepten que los compromisos deben aplicarse, que la legislación internacional debe respetarse y que los derechos humanos deben protegerse, entonces les animaremos a retomar la negociación aunque ésta sea complicada. Este es el único camino que conduce hacia la paz, la justicia y la seguridad.

Discusión

La violencia no ha terminado (desde la Cumbre de Sharm el-Sheikh). Ha empeorado. La preocupación dominante de aquellos con los que hablamos en la región es poner término a la violencia y retornar al proceso para alcanzar una paz que pueda perdurar.

Esta preocupación debe ser también la nuestra. Si nuestro informe ha de tener efecto entonces debe abordar la situación que existe, que no es la

“El gobierno de Israel afirma que el catalizador directo de la violencia fue la interrupción de las negociaciones de Camp David”



misma que la prevista por los participantes en la cumbre. En este informe intentaremos responder las preguntas que nos fueron formuladas en la Cumbre de Sharm el-Sheikh: ¿qué ocurrió?, ¿por qué ocurrió?

Ante la actual situación debemos detenernos en la tercera parte de nuestro mandato: ¿cómo puede evitarse la repetición de la violencia? La relevancia y el impacto de nuestro trabajo, al final, será valorada en función de las recomendaciones que haremos en relación a lo siguiente:

- Finalización de la violencia.
- Restablecimiento de la confianza.
- Reanudación de las negociaciones.

¿Qué ocurrió?

No somos un tribunal. Cumplimos con la petición de que no establecemos el culpable o el inocente entre los individuos y las partes (...).

A finales de septiembre del 2000, oficiales israelíes y palestinos, así como otros, recibieron informaciones de que el miembro de la Knesset [Parlamento israelí] —ahora primer Ministro— Ariel Sharon estaba planeando una visita al Haram al-Sharif/Templo del Monte en Jerusalén. Los oficiales palestinos y norteamericanos exhortaron al primer ministro Ehud Barak a prohibir la visita. El Sr. Barak nos afirmó que creía que la visita era un acto político interno directamente dirigido contra su persona por un oponente político por lo que declinó prohibirla.

El Sr. Sharon hizo la visita el 28 de septiembre acompañado por más de 1.000 policías. Pese a que los israelíes insertaron la visita dentro del contexto político interno, los palestinos la consideraron como una provocación. Al día siguiente, en el mismo lugar, un gran número de manifestantes palestinos desarmados y un gran contingente de policía israelí se enfrentaron entre sí. De acuerdo con el Departamento de Estado de EEUU, “los palestinos convocaron multitudinarias manifestaciones y arrojaron piedras a la policía cerca del muro occidental. La policía utilizó balas de metal recubiertas de caucho y munición viva para dispersar a los manifestantes, matando a cuatro personas e hiriendo a

cerca de 200”. De acuerdo con el gobierno de Israel, 14 policías resultaron heridos.

Manifestaciones similares tuvieron lugar en las semanas siguientes comenzando lo que ha sido conocido como la “Intifada del Aqsa” (al-Aqsa es una mezquita del Haram al-Sharif/Templo del Monte).

El gobierno de Israel afirma que el catalizador directo de la violencia fue la interrupción de las negociaciones de Camp David el 25 de julio del 2000 y “la extendida opinión entre la comunidad internacional de la responsabilidad palestina en el *impasse*”. Según este planteamiento, la violencia palestina fue planificada por los líderes de la AP y estaba destinada a “provocar víctimas palestinas para recuperar la iniciativa diplomática”.

La OLP rechaza la suposición de que la Intifada fue planeada. Considera, al contrario, que “Camp David no representó más que el intento por parte de Israel de extender a las negociaciones la fuerza que ejerce sobre el terreno”.

Desde la perspectiva de la OLP, Israel respondió a los disturbios con un empleo excesivo e ilegal de la fuerza letal contra los manifestantes; comportamiento que, según la OLP, refleja el desprecio de Israel hacia las vidas y la seguridad de los palestinos. Para los palestinos, las imágenes ampliamente difundidas de Muhammad al-Durra en

Gaza el 30 de septiembre, disparado mientras se parapetaba detrás de su padre, refuerzan esta percepción.

Desde la perspectiva del gobierno de Israel, las manifestaciones fueron organizadas y dirigidas por los líderes palestinos para atraer la simpatía hacia su causa en el mundo al provocar a las fuerzas de seguridad israelíes a disparar contra los manifestantes, especialmente contra la gente joven. Para los israelíes, el linchamiento de dos reservistas militares, el sargento primero Vadim Novesche y el cabo primero Yosef Avrahani, en Ramallah el 12 de octubre, reflejaba el profundamente asentado odio de los palestinos hacia Israel y los judíos.

Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos entre los manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, que llevaron al

“Desde la perspectiva de la OLP, Israel respondió a los disturbios con un empleo excesivo e ilegal de la fuerza letal contra los manifestantes”



gobierno de Israel a decretar en un principio ciertas restricciones al movimiento de las personas y los bienes en Cisjordania y Gaza (cierres), se ha convertido ahora en una amplia escalada de acciones violentas y respuestas.

En sus presentaciones, las partes intercambian alegaciones sobre la motivación y el grado de control ejercido por el otro. A pesar de ello, no se nos ofreció ninguna evidencia convincente de que la visita de Sharon fuese algo más que un acto político interno; ni tampoco se nos ha presentado ninguna evidencia convincente de que la AP planease el levantamiento.

Por consiguiente, no tenemos ninguna base para concluir que hubiera un plan deliberado por parte de la AP para iniciar la campaña de violencia a la primera oportunidad; o para concluir que hubiera un plan deliberado por parte del gobierno de Israel para responder con fuerza letal.

No obstante, tampoco hay ninguna evidencia para concluir que la AP hiciese un esfuerzo consistente para contener las manifestaciones y controlar la violencia una vez que ésta comenzó; o que el gobierno de Israel hiciese un esfuerzo consistente para usar medios no letales para controlar las manifestaciones de palestinos desarmados. En medio de una creciente ira, temor y desconfianza, cada parte asumió lo peor de la otra y actuó en consecuencia.

La visita de Sharon no provocó la "Intifada del Aqsa", pero su mal momento y su efecto provocador debería haber sido previsto; en efecto, estos fueron previstos por aquellos que reclamaron que la visita fuese prohibida. Más significativos fueron los acontecimientos que tuvieron lugar a continuación: la decisión de la policía israelí el 29 de septiembre de emplear medios letales contra los manifestantes palestinos, y el consiguiente fracaso de cada parte, como hemos señalado más arriba, de ejercer la contención.

¿Por qué ocurrió?

Las raíces de la actual violencia van mucho más allá que una cumbre inconclusa. Ambas partes han

dejado clara su profunda desilusión con el comportamiento de la otra parte al no satisfacer las expectativas depositadas en el proceso de paz.

Expectativas divergentes : Estamos sorprendidos por las divergentes expectativas expresadas por las partes en relación a la aplicación del proceso de Oslo. Los resultados logrados por este proceso eran impensables hace menos de diez años. Durante la última ronda de negociaciones, las partes estuvieron más cerca que nunca de un acuerdo definitivo.

Sin embargo, tanto los palestinos como los israelíes nos dijeron que la premisa sobre la que estaba basada el proceso de Oslo —es decir, aplazar las cuestiones complejas del "estatuto definitivo" hasta el final del proceso— se ha visto sometida a una intensa presión.

El gobierno de Israel ha establecido como prioritario negociar un acuerdo sobre el estatuto definitivo en una atmósfera no violenta, de acuerdo con los compromisos contemplados en los acuerdos entre las partes.

La opinión de la OLP es que las demoras en el proceso han sido el resultado de un intento israelí de prolongar y consolidar la ocupación (...). En suma, las propuestas de Israel en Camp David preveían la anexión israelí de los mejores territorios palestinos, la perpetuación

del control israelí de Jerusalén Este, una presencia militar permanente en el territorio palestino, el control israelí de los recursos naturales palestinos, el espacio aéreo y las fronteras, y el retorno de menos del 1% de los refugiados a sus hogares.

Ambas partes ven el incumplimiento de los acuerdos alcanzados desde la apertura del proceso de paz como una evidencia de la ausencia de buena fe. Esta conclusión conduce a una erosión de la confianza, incluso antes del comienzo de las negociaciones sobre el estatuto definitivo.

Perspectivas divergentes: Durante los últimos siete meses, estas opiniones han empeorado. Cada parte contempla a la otra como si hubiese actuado de mala fe; como si hubiese transformado el optimismo de Oslo en el sufrimiento y el dolor de las víctimas y

"El gobierno de Israel debería congelar toda actividad colonizadora, incluido el 'crecimiento natural' de los asentamientos existentes"



de sus personas queridas. En sus declaraciones y acciones, las partes fueron incapaces de reconocer la validez de la perspectiva de la otra parte.

La perspectiva palestina: desde la posición palestina, [la Conferencia de Paz de] Madrid [de 1991] y [los Acuerdo de] Oslo [de 1993] anunciaron la posibilidad de un Estado y garantizaron un fin de la ocupación y una resolución de los asuntos pendientes dentro de un plazo de tiempo limitado. Los palestinos están verdaderamente enojados por la continua ampliación de los asentamientos y por sus experiencias diarias de humillación y de trastornos resultado de la presencia israelí en los territorios palestinos. Los palestinos consideran a los colonos y a los asentamientos levantados sobre su terreno no sólo como una violación del espíritu del proceso de Oslo, sino también como la aplicación de la aplastante superioridad militar israelí.

La OLP también reclama que el gobierno de Israel ha incumplido todos sus compromisos, como el de una nueva retirada de Cisjordania y la liberación de los prisioneros palestinos. Además, los palestinos expresaron su frustración ante la ausencia de avances en torno a los refugiados y el deterioro de las circunstancias económicas en Cisjordania y Gaza.

La perspectiva israelí: Desde la perspectiva del gobierno de Israel, la expansión de la actividad de los asentamientos y la adopción de medidas para facilitar la comodidad y la seguridad de los colonos no perjudicaban el resultado de las negociaciones sobre el estatuto definitivo (...).

De hecho, los israelíes señalan que en la Cumbre de Camp David y en las siguientes conversaciones, el gobierno de Israel ofreció concesiones significativas en torno a los asentamientos en el contexto de un acuerdo global.

La seguridad, sin embargo, es la mayor preocupación del gobierno de Israel. El gobierno de Israel mantiene que la OLP ha violado sus solemnes compromisos al continuar usando la violencia con fines políticos.

De acuerdo con el gobierno de Israel, el fracaso palestino toma diferentes formas: incitación anti-israelí y anti-judía institucionalizada, liberación de los terroristas detenidos, fracaso en el control de armas ilegales, y dirección de operaciones violentas (...). El gobierno de Israel mantiene que la OLP ha infringido de manera significativa su compromiso de renunciar al empleo del terrorismo y a otros actos de violencia, por lo tanto ha erosionado la confianza entre las partes.

Fin de la violencia

Tanto para los israelíes como para los palestinos la experiencia de los pasados siete meses ha sido muy intensa. Estamos impactados por sus relatos. Las familias israelíes y palestinas emplean prácticamente las mismas palabras para describir su dolor.

Con la extensión de la violencia, ambas partes han tendido a retratar al otro con estereotipos hostiles. Este ciclo no puede romperse con facilidad. Sin una determinación considerable y un compromiso de buena voluntad, el restablecimiento de la confianza será imposible.

Cese de la violencia: desde 1991, las partes se han comprometido de manera consistente, en todos sus acuerdos, en el camino de la no violencia. Para detener la violencia ahora, la AP y el gobierno de Israel no necesitan "reinventar la rueda".

Bastaría con que adoptaran medidas inmediatas para poner fin a la violencia, reafirmar sus acuerdos mutuos y retomar las negociaciones.

Reanudación de la cooperación securitaria: los oficiales de seguridad palestinos dijeron que a la AP le llevaría tiempo retomar el pleno control sobre los elementos armados bajo su mando nominal y ejercer una influencia decisiva sobre otros elementos armados operando en el área palestina. Los oficiales de seguridad israelíes no han rebatido estas afirmaciones. Lo que es importante es que la AP haga todos los esfuerzos para hacer cumplir un completo cese de la violencia y que esto sea percibido con claridad por el gobierno de Israel. El gobierno de Israel

“El gobierno de Israel y la AP deberían reafirmar su compromiso con los acuerdos existentes y sus promesas, y deberían aplicar un cese incondicional de la violencia”



debe a su vez hacer un 100% de esfuerzo para asegurar que los puntos de fricción potencial, donde los palestinos están en contacto con los israelíes armados, no se conviertan en escenarios para la reanudación de las hostilidades.

El colapso de la cooperación de seguridad a principios de octubre refleja la creencia de cada parte en que la otra está inmersa en un curso violento de acción. Si las partes desean realizar un 100% de esfuerzo para prevenir la violencia, es obligatoria la inmediata reanudación de la cooperación en materia de seguridad.

Restablecimiento de la confianza

El histórico choque de manos entre el presidente Arafat y el ex primer Ministro Rabin en la Casa Blanca en septiembre de 1993 simbolizó la esperanza de las partes en que se había abierto la puerta de la solución pacífica de sus controversias. A pesar de la violencia actual y de la mutua pérdida de confianza, ambas comunidades han expresado repetidamente su deseo de paz. La canalización de este deseo en un progreso efectivo parece complicada. La restauración de la confianza es esencial y las partes deberían adoptar pasos positivos con este propósito. Dado el elevado nivel de hostilidad y desconfianza, la planificación y la secuenciación de estos pasos son cruciales. Esto puede ser únicamente decidido por las partes. Instamos a las partes a iniciar el proceso de toma de decisiones de manera inmediata.

Terrorismo: en el Memorándum de Sharm el-Sheikh de septiembre de 1999, las partes prometieron reaccionar contra "cualquier amenaza o acto de terrorismo, violencia o incitación".

El terrorismo engloba los asesinatos deliberados y las heridas de no combatientes seleccionados al azar con fines políticos y pretende lograr resultados políticos por medio de la extensión del terror y la desmoralización entre la población.

En sus declaraciones y comunicados oficiales, el gobierno de Israel ha acusado a la AP de respaldar el terrorismo al liberar a los terroristas encarcelados,

permitir al personal de seguridad de la AP incitarlos y, en algunos casos, conducir operaciones terroristas, e interrumpir la cooperación de seguridad con el gobierno de Israel.

La AP niega con vehemencia estas acusaciones. Pero los israelíes mantienen que los líderes de la AP no han hecho un verdadero esfuerzo para prevenir el terrorismo anti-israelí. Se cree que esto, en sí mismo, es el mayor obstáculo para restablecer la confianza.

Creemos que la AP tiene una responsabilidad en el restablecimiento de la confianza dejando clara a ambas comunidades que el terrorismo es censurable e inaceptable y adoptando todas las medidas necesarias para prevenir operaciones terroristas y para castigar a sus autores. Este esfuerzo debería incluir medidas inmediatas para capturar y encarcelar los terroristas que operan dentro de la jurisdicción de la AP.

“El histórico
choque de manos
entre el
presidente Arafat
y el ex primer
Ministro Rabin
simbolizó la
esperanza de que
se había abierto
la puerta de la
solución pacífica
de las
controversias”



Asentamientos: el gobierno de Israel también tiene una responsabilidad en ayudar a restablecer la confianza. Un cese de la violencia palestino-israelí será especialmente complicado de mantener a menos que el gobierno de Israel congele toda actividad de construcción de asentamientos. No debe permitirse que las actividades de los asentamientos socaven la restauración de la calma y la reanudación de las negociaciones.

En nuestras dos visitas a la región hubo anuncios israelíes sobre la expansión de los asentamientos, y éste fue uno de los primeros asuntos planteados por los palestinos con los que nos reunimos. El gobierno de Israel describe su política como destinada a prohibir nuevos asentamientos, pero a permitir la expansión de los ya existentes para acomodar “el crecimiento natural”. Los palestinos consideran que no hay distinción entre los asentamientos *nuevos* y los *ampliados*; y que, excepto por un breve periodo de tiempo durante el mandato del primer ministro Yitzhak Rabin, se ha realizado un esfuerzo permanente y agresivo por parte de Israel para incrementar el número y el tamaño de los asentamientos.

Reducir la tensión: tanto los palestinos como los israelíes nos han dicho que las emociones generadas por algunas muertes recientes y por los funerales han alimentado confrontaciones adicionales y, en efecto, han mantenido el ciclo de violencia. Ambas partes deben dejar claro que las demostraciones de violencia no serán toleradas. Urgimos a ambas partes a mostrar un mayor respeto por la vida humana cuando los manifestantes se enfrentan al personal de seguridad.

Acciones y respuestas: en los primeros tres meses del actual alzamiento, la mayoría de incidentes *no* implicó el empleo de armas de fuego y explosivos palestinos (...). En total, cerca de 500 personas murieron y más de 10.000 resultaron heridas en los pasados siete meses; la aplastante mayoría eran palestinos.

La caracterización israelí del conflicto como un "conflicto armado similar a una guerra" no describe adecuadamente la variedad de incidentes denunciados desde septiembre del 2000. Es más, al definir así el conflicto, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) han suspendido las investigaciones del Departamento de Policía Militar siempre que un palestino muera a manos de un soldado de las FDI en un incidente ajeno al terrorismo en los territorios.

Existe una controversia entre las partes sobre aquello que Israel denomina "apuntar a combatientes individuales del enemigo". La OLP describe a éstas como acciones *extrajudiciales* que suponen "una clara violación del artículo 32 de la Cuarta Convención de Ginebra (...)". El gobierno de Israel declara que, "cualquier acción adoptada por Israel se encuadra plenamente dentro de los límites de los pertinentes y aceptados principios relativos a la conducta en periodo de hostilidades".

Estamos profundamente preocupados por las implicaciones que sobre la seguridad pública tienen los intercambios de fuego entre las áreas pobladas. Pistoleros palestinos han disparado contra los asentamientos israelíes y las posiciones cercanas de las FDI desde dentro de zonas civiles palestinas o áreas adyacentes poniendo en peligro la vida de civiles

inocentes tanto israelíes como palestinos. Condenamos las acciones de pistoleros dentro o cerca de zonas civiles (...). Urgimos al cese de estas provocaciones y a que las FDI ejerzan la contención máxima en sus respuestas si esto ocurriese. El uso inapropiado y excesivo de la fuerza conduce con frecuencia a una escalada [de violencia].

En el lado palestino existen inquietantes ambigüedades en las áreas básicas de responsabilidad. Urgimos a la AP a que adopte las medidas necesarias para que establezca una cadena de mando clara e incuestionable para el personal armado que opera bajo su autoridad.

"Un cese de la violencia palestino-israelí será complicado de mantener a menos que el gobierno de Israel congele toda actividad de construcción de asentamientos"



Incitación: en sus declaraciones y escritos al Comité [Mitchell] ambas partes expresaron su preocupación sobre el lenguaje cargado de odio y las imágenes emitidas por el otro (...). Llamamos a las partes para que renueven sus compromisos formales para fomentar una mutua comprensión y tolerancia y a abstenerse de la incitación y de la propaganda hostil.

Impacto económico y social de la violencia: se han impuesto nuevas restricciones al movimiento de las personas y de bienes en Cisjordania y Gaza por parte de Israel. Estos cierres adoptan tres formas: aquellos que restringen el movimiento entre las áreas palestinas e Israel, aquellos que restringen el movimiento entre las áreas palestinas, y aquellos que restringen el movimiento desde las áreas palestinas a países extranjeros. Estas medidas han trastornado las vidas de cientos de miles de personas.

Es de particular preocupación para la AP que se hayan destruido decenas de miles de árboles frutales y de olivos, así como otras propiedades agrícolas, por las fuerzas de seguridad israelíes. Los cierres han tenido también otros efectos adversos.

Conocemos las preocupaciones securitarias israelíes. Creemos, sin embargo, que el gobierno de Israel debería levantar los cierres, debería transferir a la AP todos los ingresos que debe, y debería permitir que los palestinos empleados en Israel retornen a sus puestos de trabajo. Los cierres policiales juegan a

favor de los extremistas que buscan extender sus apoyos y así fomentar una escalada [de violencia]. La AP debería reanudar la cooperación con las agencias de seguridad israelíes para asegurar que los trabajadores palestinos empleados en Israel sean plenamente investigados y estén libres de cualquier conexión con las organizaciones terroristas.

Lugares sagrados: Es especialmente lamentable que lugares como el Monte del Templo/Haram al-Sharif en Jerusalén, la Tumba de José en Nablus, y la Tumba de Raquel en Belén hayan sido escenarios de violencia, muerte y daños. Estos son lugares de paz, oración y reflexión que deben ser accesibles a todos los creyentes. Los lugares considerados santos por musulmanes, judíos y cristianos merecen el respeto, la protección y la conservación.

Fuerza internacional: uno de los aspectos más controvertidos surgidos durante nuestra investigación es la cuestión del despliegue de una fuerza internacional en las áreas palestinas. La AP está totalmente a favor de una fuerza que proteja a los civiles palestinos y sus propiedades (...). El gobierno de Israel se opone a la fuerza de protección internacional al considerar que no responderá a las preocupaciones securitarias israelíes e interferirá en las negociaciones bilaterales para la resolución del conflicto. Creemos que para que una fuerza tal sea efectiva requiere el apoyo de ambas partes.

Reanudación de las negociaciones

Los líderes israelíes no desean ser percibidos como "los que sacan partido de la violencia". Los líderes palestinos no desean ser percibidos como "los que sacan partido de la ocupación". Somos conscientes de las limitaciones políticas de los líderes de ambas partes. Sin embargo, si el ciclo de violencia debe romperse y reanudarse la búsqueda de la paz, se necesita una nueva relación bilateral que incorpore tanto la cooperación en materia de seguridad como las negociaciones.

No podemos recomendar a las partes cuál es la mejor manera de alcanzar sus objetivos políticos. Sin embargo, la construcción de una nueva relación bilateral que solidifique y trascienda un acuerdo para el cese de la violencia exige que se asuman riesgos de

forma inteligente. Se requiere, en primera instancia, que cada parte que cada parte mire a la otra de nuevo como su socio.

Definir un punto de arranque es decisión de las partes. Ambas partes han declarado que siguen comprometidas con sus acuerdos mutuos y sus promesas. Es el momento de explorar una mayor implementación. Las partes deberían declarar su intención de encontrarse según estas bases, con el propósito de reanudar unas negociaciones plenas y significativas, dentro del espíritu de sus promesas en Sharm el-Sheikh en 1999 y 2000.

"La AP debe establecer una cadena de mando clara"



Recomendaciones

El gobierno de Israel y la AP deben actuar rápidamente y con decisión para detener la violencia. Sus objetivos inmediatos deberían ser restablecer la confianza y reanudar las negociaciones.

Fin de la violencia

El gobierno de Israel y la AP deberían reafirmar su compromiso con los acuerdos existentes y sus promesas, y deberían aplicar un cese incondicional de la violencia.

El gobierno de Israel y la AP deberían reanudar de manera inmediata la cooperación securitaria.

Una cooperación bilateral efectiva destinada a prevenir la violencia facilitará la reanudación de las negociaciones (...). Creemos que la cooperación securitaria no puede sostenerse durante mucho tiempo si las negociaciones son demoradas irrazonablemente, si las medidas securitarias "sobre el terreno" son consideradas como hostiles, o si los pasos que son adoptados son percibidos como provocaciones que perjudican el resultado de las negociaciones.

Restablecimiento de la confianza

La AP y el gobierno de Israel deberían trabajar de manera conjunta para establecer un "periodo de enfriamiento" y aplicar otras medidas para restablecer la confianza.

La AP y el gobierno de Israel deberían reanudar sus esfuerzos para identificar, condenar y disuadir todas las formas de incitación.

La AP debería dejar claro por medio de acciones

concretas tanto a los palestinos como a los israelíes que el terrorismo es censurable e inaceptable, y que la AP hará un 100% de esfuerzo para prevenir operaciones terroristas y para castigar a sus autores. Este esfuerzo debería incluir medidas inmediatas para capturar y encarcelar a los terroristas que operen dentro de la jurisdicción de la AP.

El gobierno de Israel debería congelar toda actividad colonizadora, incluido el "crecimiento natural" de los asentamientos existentes. El tipo de cooperación de seguridad deseada por el gobierno de Israel no puede coexistir con la actividad colonizadora.

El gobierno de Israel debería tener en consideración si los asentamientos, que son puntos focales de fricción, son fichas valiosas en unas negociaciones futuras o son provocaciones destinadas a evitar el comienzo de unas conversaciones productivas.

El gobierno de Israel puede dejar claro a la AP que una futura paz no debería representar una amenaza a la continuidad territorial del Estado palestino a establecerse en Cisjordania y Gaza.

Las FDI deberían considerar retirarse a las posiciones vigentes antes del 28 de septiembre del 2000 lo que reducirá el número de puntos de fricción y las potenciales confrontaciones violentas.

El gobierno de Israel debería asegurar que las FDI adoptan y hacen cumplir políticas y procedimientos que alienten respuestas no letales a manifestaciones desarmadas, con vistas a minimizar las bajas y la fricción entre las dos comunidades.

El gobierno de Israel debería levantar los cierres, transferir a la AP todos los ingresos de tasas que debe, permitir a los palestinos que han sido empleados en Israel retornar a sus puestos de trabajo; y asegurar que las fuerzas de seguridad y los colonos se abstienen de destruir hogares y carreteras, así como árboles y otras propiedades agrícolas en las áreas palestinas.

La AP debería reanudar la cooperación con las agencias de seguridad israelíes para asegurar al máximo posible que los trabajadores palestinos empleados en Israel sean investigados completamente y estén libres de conexiones con organizacio-

nes e individuos implicados en el terrorismo.

La AP debería evitar que los pistoleros empleasen las zonas pobladas palestinas para disparar sobre áreas pobladas israelíes y posiciones de las FDI. Estas tácticas exponen a los civiles de ambos bandos ante un riesgo innecesario.

El gobierno de Israel y las FDI deberían adoptar y aplicar políticas y procedimientos encaminados a asegurar que la respuesta a cualquier tiroteo proveniente de civiles palestinos tenga en cuenta que precisamente el objetivo de los pistoleros sea provocar una respuesta excesiva de las FDI.

"Una futura paz no debería amenazar la continuidad territorial del Estado palestino"

• • • • •

Reanudación de las negociaciones

Reiteramos nuestra creencia en que un esfuerzo de un 100% para detener la violencia, una inmediata reanudación de la cooperación securitaria y un intercambio de medidas destinadas a restablecer la confianza son importantes para la reanudación de las negociaciones. Pero ninguno de estos pasos se mantendrá durante mucho tiempo sin un retorno a unas negociaciones serias.

No está dentro de nuestro mandato determinar el lugar, las bases o la agenda de las negociaciones. Sin embargo, con el propósito de proporcionar un contexto político efectivo para la cooperación práctica entre las partes, las negociaciones no deben retrasarse de manera irrazonable y deben, desde nuestro punto de vista, manifestar un espíritu de compromiso, reconciliación y asociación, a pesar de los eventos de los últimos siete meses.

Firmado por:

George J. Mitchell,

presidente, y ex miembro del Senado de EEUU;

Suleyman Demirel,

9º presidente de la República de Turquía;

Thorbjoern Jagland,

ministro de Asuntos Exteriores de Noruega;

Warren B. Rudman,

ex miembro del Senado de EEUU; y

Javier Solana,

Alto Representante Europeo de Política Exterior y de Seguridad Común, Unión Europea." ■

(Texto publicado en el diario israelí *Ha'aretz*)